

resultan un tanto escasos. Si en un libro tan extenso y tan rico en análisis e interpretaciones, la incorporación de poco más de cincuenta caricaturas podría resultar suficiente desde una perspectiva de costos editoriales, para un lector-espectador ávido de ver lo que se ha descrito en el texto de manera detallada y minuciosa, en verdad que ese medio centenar de imágenes generan apenas un dulce sabor de boca; sobre todo cuando dicho lector-espectador busca empacharse con la mieles de Fígaro, Daniel Cabrera, Alamilla, Muller, Villasana, Caifán, y todos esos maestros de *La Orquesta*, *El Quijote*, *La Linterna*, *La Metralla*, *Mefistófeles*, *El Padre Cobo*, *El Rascatripas*, *El Ahuizote* y su irreverente descendencia, y tantos y tantos más. Sugiero, por lo tanto, que en una siguiente edición, a los lectores no se nos escatime la posibilidad de recordar extensamente cómo hace poco más de un siglo la risa, la ironía y la crítica poblaron los periódicos nacionales, y así continuamos burlándonos de y pasando al cadalso de la crítica la ineficacia y la arrogancia de nuestros gobernantes actuales.

Es muy probable que este magnífico libro de Fausta Gantús no tarde en convertirse en referencia obligada de la historia política y cultural del México de la segunda mitad del siglo XIX, y tal vez de la historiografía mexicana en general.

Ricardo Pérez Montfort

*Centro de Investigación y Estudios
Superiores en Antropología Social*

ROGELIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, *El centro dividido: la nueva autonomía de los gobernadores*, México, El Colegio de México, 2008, 335 pp. ISBN 9786074620030

De vez en cuando, escribió Ernst Renan, para acertar es preciso estar fuera de moda. Desde el ascenso de los *Annalistas* y la his-

toria social británica, la historia política ha sido vista por muchos como algo intelectualmente sospechoso; la historia cultural exacerbó este prejuicio. La historia específica del Estado priísta fue igualmente desatendida durante un rato largo (el empobrecimiento de los archivos no ayudó.) Éstas fueron en gran parte las razones subyacentes en la extraña ignorancia colectiva de la profesión durante los años noventa: mientras ese Estado entraba en agonía, seguíamos sin mucha idea de su génesis o de los mecanismos que lo sustentaron durante tanto tiempo. Aunque sociólogo, formalmente, Rogelio Hernández fue uno de los pocos solitarios que se interesaron en tal historia en aquel entonces. Su trabajo anterior considera el funcionamiento de las élites, desde sus camarillas más caciquiles, como el Grupo Atlacomulco, hasta sus reformadores malogrados, como Carlos Madrazo. En *El centro dividido*, Hernández analiza las relaciones entre los poderes regionales y la federación, reconstruyendo el equilibrio informal que sustentaba una relativa estabilidad, detallando las causas e impactos de su derrumbe. Su estudio se aventura hasta el año 2007, completando así una suerte de trilogía interdisciplinaria de sociología historizada (o historia sociológica) de la clase reinante en el México posrevolucionario.

Su primer argumento reevalúa la autonomía tradicional de los gobernadores, estableciendo así un plataforma histórica para medir los cambios de la prolongada transición. Entre los politólogos que sí han estudiado estos asuntos, hay un consenso sobre la impotencia fundamental de los mandatarios estatales en el dizque sistema priísta de poder. En los análisis de Pablo González Casanova y Frank Brandenburg, los gobernadores eran pobres títeres del presidente en turno, dotados de administraciones de una rústica sencillez, estrechamente controlada por su fuerte dependencia sobre el presupuesto federal, siempre vigilada por funcionarios del centro, por los comandantes de la zona militar y aun por sus propios amigos y clientes. Peter Smith encontró

que sólo uno de cada 25 gobernadores entre 1946 y 1971 provenía de la política estatal, mientras que el origen más común era un Senado que él (y otros) dibujaba como intrínsecamente lambiscón. Aun la interpretación radicalmente descentralizada de Jeff Rubin estuvo de acuerdo: en su antropología política del Istmo se nota que el cacique Heliodoro Charis gozaba de más autonomía y longevidad que sus superiores nominales, accidentados, en la ciudad de Oaxaca. Si los gobernadores priístas eran dinosaurios, eran dinosaurios sin dientes.

Hernández no está de acuerdo. Él propone que las interpretaciones clásicas pecan de un formalismo que las debilita y que las conduce a subestimar los considerables recursos políticos de los gobernadores. No eran peleles; la mayoría eran líderes regionales cuya función primordial, de garantizar la estabilidad y el orden público en sus estados, necesitaba autonomía y amplias dotes políticas. (La pequeña ola de historias recientes de la violencia que esta tarea requería refuerza el argumento de Hernández, estableciendo con claridad los retos serios que los gobernadores enfrentaban para mantener un simulacro de paz, cuando menos.) Así que el centro les cedió control sobre todas las instituciones políticas regionales. Pero eso no quiere decir que gozaran de impunidad a nivel micro, porque a la vez tuvieron que responder a las presiones de políticos estatales al elegir subordinados y distribuir recursos.

Incluso el pueblo tuvo voz. El aparato político estatal se formuló tomando en cuenta, la mayoría de las veces, lo que la jerga priísta denominó la “auscultación”: la opinión pública, indagada por agentes del partido y por la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, o sea: Gobernación. Además, desde Adolfo Ruiz Cortines, cuando menos, el derecho del pueblo a influir en la selección de ayuntamientos se reconoció tácitamente. La época de oro del PRI —si es que existió— no fue tan excepcional como se ha pintado: se caracterizó por las mismas dos

tendencias fundamentales que han marcado la historia de México desde la independencia: por parte de los pueblos, la búsqueda de autonomía local; por parte de los élites, el esfuerzo de construir una nación centralizada. Lo cual cuadra bien con la obra de historiadores, incluidos Enrique Florescano, Michael Ducey, Peter Guardino y Ben Smith, mientras no concurre con la politología clásica ni con algunos analistas más contemporáneos (como Todd Eisenstadt), quienes adoptan las asunciones tradicionales sin cuestionamientos. Todavía bajo el PRI, no se pudo olvidar lo que Hernández califica como “el enorme poder de los estados”. Cuando el Estado priísta funcionaba fue a raíz de “un delicado equilibrio entre una autonomía basada en poderes y recursos locales reales, y controles y poder superior”. Los gobernadores siempre gozaban de una autonomía importante. En su ausencia sus tareas hubieran sido imposibles.

La implicación de todo esto es clara: ni el monolito corporativista, ni la dictadura perfecta, ni la presidencia imperial existieron. México tampoco se caracterizaba por ser un pueblo apolítico o, en el discurso autoritario clásico, “apático”. Lo más cercano al sistema mecánico de poder llegó en los últimos años de Ruiz Cortines y el sexenio de Adolfo López Mateos, interpretado, lo mismo por Abel Quezada que por Ariel Rodríguez Kuri, como lo mejor de la época priísta. Los líderes que soñaron con una verdadera presidencia imperial —notablemente Miguel Alemán y Carlos Salinas— acabaron con resultados entre riesgosos y catastróficos. Aun en el auge del poder presidencial, el poder tradicional e informal de las regiones resistía, un poder que se reveló en el reto que varios caciques lanzaban contra el dedazo presidencial a finales de los años cincuenta. Incluso cuando los hombres del centro se impusieron, acabando con el poder de Gonzalo N. Santos, Leobardo Reynoso y los Ávila Camacho, el poder regional seguía, manifiesto en las derrotas electorales de candidatos oficiales en Yucatán y Zacatecas. Aun cuando los presidentes usaron su poder

personal para quitar a un mandatario, se hizo con mucha cautela y con la clara justificación de la incapacidad del gobernador saliente para mantener la paz. (Otra vez Alemán y Salinas son las excepciones, despidiendo gobernadores libremente y con graves consecuencias.) Los gobernadores pudieron sobrevivir a sus malas relaciones con el presidente por la sencilla razón del alto gasto que implicaba despedirlos. Sabemos que hasta los políticos pueblerinos leían a Maquiavelo en el México del siglo xx. Este libro sugiere que Montesquieu y Tocqueville también se consultaban, porque lo que Hernández propone es un sistema claro, funcional aunque medio informal, de equilibrio de poderes.

Una vez establecidos sus dos argumentos históricos principales, Hernández se enfoca, en la segunda mitad del libro, a procesos más recientes y aun contemporáneos. Su análisis del *long goodbye* del PRI se centra sobre la presidencia de Carlos Salinas, a quien Hernández dibuja como un maquiavélico incompetente. (Concurriendo así con la *vox populi*, que veía al presidente Salinas como el aprendiz de mago o —como lo expresó un graffiti particularmente incisivo— “el último empeorador”.) Hernández da su propio toque a la ya vieja narrativa del hubris tecnocrático y del desastre político, mediante el marco analítico de descentralización. Ésta, argumenta, fue motivada por cinco fenómenos principales. Fue en parte un problema estructural: el crecimiento demográfico y el fin del crecimiento económico explosivo dieron lugar a un déficit estructural desde los años setenta. El gobierno federal reaccionó trasladando tareas y responsabilidades —pero no fondos— a los gobiernos regionales. Esta “descentralización de problemas” (Dulce María Sauri) cuadró con las ideas principales del *Washington consensus*, creando así un matrimonio a la fuerza entre la urgencia y la ideología. Pero también fue una descentralización políticamente forzada, empujada por los políticos opositores en su demanda de controlar sus propios presupuestos, así como por la destrucción irresponsable del poder real

de la Secretaría de Gobernación. Así que la campaña de Salinas para imponer la “modernización del Estado” necesitaba, con gran ironía y mínima lógica, una combinación destructiva de centralización de poder personal y arbitrario y la distribución de gubernaturas y alcaldías en el PAN. Los panistas ganaron algunas; otras, como la alcaldía de Mérida en 1993, les fueron traspasadas en pactos preelectorales que nada tuvieron que ver con los votos emitidos. La oposición entendió que la poca legitimidad de los comicios de 1988 dejó al presidente debilitado desde el inicio, y al cuestionar la legitimidad de cada elección subsecuente lograba —de un modo muy priísta— convertir la presión constante en una cuota de poder. En términos de partido y Estado, Salinas vendió la plata familiar, y la vendió barata.

El resultado fue el crecimiento de poderes regionales sin que un nuevo federalismo surgiera para moderar conflictos, coordinar la distribución y uso de recursos o controlar un caciquismo resurgente. Los gobernadores tomaron control total de la política en sus estados. Los de la oposición evidentemente no tuvieron necesidad de seguir ninguna línea central, mientras que los del PRI añadieron a sus portafolios tradicionales más control sobre las agencias del estado, y el poder crítico de intervenir en, y a veces determinar, la selección no sólo de diputados y senadores federales, sino también de sus propios sucesores. La descentralización del tardío Estado priísta fue, al menos así le pareció a este lector, como un gran regreso a su formación en los años cuarenta. Regresando la cinta de la historia, las semejanzas entre los modernizadores Alemán y Salinas abundan: la tecnocracia casada con la corrupción, la retórica de la democratización mezclada con la búsqueda del poder personal, autoritario y trans-sexenal, y los derrumbes económicos que conducen a la forzada estabilización de sus sucesores. Tristemente para algunos, no había ni un Cárdenas ni un Ruiz Cortines para suceder a Salinas. Lo que Hernández dibuja es un traslado de los patrones de la polí-

tica local de antaño —la secesión de disidentes del PRI para formar otros partidos, la violencia colectiva táctica y su uso para la negociación postelectoral, la formación de instituciones paralelas por los perdedores— a un nivel regional e incluso nacional. Tales patrones contribuyeron mucho en su tiempo para asegurar en numerosos lugares una suerte de poliarquía pueblerina. A finales del siglo no hicieron mucho para asegurar una democracia institucional y nacional. En su lugar se dio una colonización de los viejos partidos políticos por parte de una nueva clase de caciques. Hace años Alan Knight bromeó sobre la posibilidad de un “caciquismo empanizado” en el nuevo México; los múltiples casos que Hernández presenta van en serio, y no se limitan a ningún partido.

La metodología de Hernández en sí misma constituye un triste argumento para esta última proposición. Originalmente intentó entrevistarse con ex gobernadores del PAN y del PRD para usar sus experiencias en la transición y sus apreciaciones del antiguo sistema de poder como fuente principal en su análisis. Sin excepción, todos se negaron a recibirlo. Una condena más explícita de la transparencia de los nuevos gobernantes sería difícil de imaginar. Así que recurrió a los principales gobernadores priístas de los noventa, logrando con sujetos como Manuel Bartlett, Diódoro Carrasco y Dulce María Sauri una serie de entrevistas de una notable franqueza. Éstos, triangulados con documentos del partido y trabajos secundarios, le proporcionaron a Hernández una perspectiva privilegiada sobre el *decline and fall* del imperio del PRI, la cual forma la base de sus argumentos. Le dio a la vez un reto epistemológico: tales informantes típicamente no minimizan su propia importancia. La consulta de los archivos de Investigaciones Políticas y Sociales, la Dirección Federal de Seguridad y sus sucesores hubiera ayudado a verificar sus conclusiones, en particular las históricas (dado el difícil acceso, e incluso la falta de catálogos cuando este proyecto se

realizaba, hacía más fácil decirlo que hacerlo). Quizás por eso, y por la tendencia natural a minimizar, en los estudios de élites, las influencias populares, es posible que se sobreestime ligeramente la autonomía de los gobernadores antes de los ochenta; su autonomía no frente al presidente, sino ante el pueblo. (La conclusión de que el presidente siempre seleccionó a los diputados federales podría también matizarse.) Detalles sobre las elecciones primarias que el PRI instigó varias veces en su historia, o sobre la eficacia y frecuencia de las movilizaciones populares en los estados y el poder de veto que éstos podrían constituir, hubieran reforzado aún más su argumento histórico principal, de que el sistema político no fue una máquina sino un equilibrio dinámico, que dependía siempre de un refinado malabarismo humano para su supervivencia.

Los detalles del funcionamiento del Estado posrevolucionario y de sus relaciones con la sociedad se debatirán durante largo tiempo. Nuestro conocimiento depende en parte de la realización de la proclamada apertura de los archivos, en particular del establecimiento de un catálogo para la IPS pos1952, y de la provisión de archivos militares más allá de las hojas de servicio y la documentación de la guerra sucia. Mientras tanto, el libro de Rogelio Hernández demuestra sin lugar a dudas la necesidad de revisar la narrativa convencional de la democratización en México. Su análisis, una combinación insólita de lo formal/institucional y lo informal, provee una explicación lúcida y persuasiva del derrumbe de lo que había de un Estado centralizado bajo el PRI. Tal Estado no fue un monolito presidencial, que administrara una población sin influencias políticas. Los reformadores de la transición no eran tan originales ni muchas veces tan democráticos como se les ha pintado. Algunos *bogeymen*, en contraste, pueden reinterpretarse como reformadores importantes, como él propone en el caso de Manuel Bartlett en Puebla. Hernández cumple con creces con una función clave del historiador: la de

recordarnos que no hay mucho nuevo bajo el sol. Y esa conclusión podría ser relevante más allá de los departamentos de politología.

Paul Gillingham
University of Pennsylvania

MARIO BARBOSA y SALOMÓN GONZÁLEZ (comps.), *Problemas de la urbanización en el Valle de México, 1810-1910. Un homenaje visual en la celebración de los centenarios*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa, «Los Centenarios», 2009, 300 pp. ISBN 9786074771336

En ocho capítulos que abordan diversos temas relacionados con la urbanización en el Valle de México durante el primer siglo de vida independiente, este libro propone una serie de interpretaciones que explica el devenir de esta importante zona del país. Además de ser un texto especializado escrito en un lenguaje sencillo y ameno, es un bello libro, bien cuidado, con reproducciones de mapas antiguos, planos modernos y fotografías inéditas.

Uno de los aspectos más relevantes de esta investigación, realizada por seis especialistas, es la construcción y utilización de sistemas de información geográfica que se condensan en una serie de mapas elaborados a partir de textos históricos, cartografía y otros documentos. Estos mapas expresan diversas condiciones en el espacio de la ciudad de México y, en algunos casos, en el valle que la contiene. Es una cartografía de gran riqueza y, sin duda, uno de los aportes fundamentales de la obra. A lo largo de todos los trabajos se hace presente un fructífero diálogo entre geografía e historia que genera la presencia de nuevos enfoques, hipótesis y preguntas sobre la cuenca de México y sus asentamientos humanos.

Otra virtud de esta historia urbana es que los trabajos que la integran tienen líneas de continuidad y preguntas comunes que